

EDITORIAL

La palma de aceite en Colombia se encuentra desprotegida - Se requiere el apoyo del Estado para asegurar el *Riesgo País* -

Por más de 40 años la palmicultura colombiana ha contribuido a la generación de riqueza y bienestar para muchas comunidades en amplias regiones del país. Empresarios palmeros y pequeños cultivadores, profesionales y técnicos en diferentes disciplinas y trabajadores agrícolas, entre otros, han logrado hacer de la Agroindustria de la Palma de Aceite uno de los subsectores productivos con mayor fortaleza y perspectivas de prosperidad para Colombia.

No obstante, la inseguridad y la violencia que actualmente se presentan en gran parte de las zonas del país, se constituyen en los factores más adversos para mejorar la competitividad, atraer la inversión y capitalizar los recursos físicos y humanos que requiere el desarrollo y crecimiento de esta agroindustria en Colombia.

La palma de aceite, por ser un cultivo de largo plazo y tardío rendimiento, demanda importantes inversiones y una exigente capacidad empresarial para su manejo. Las erogaciones en diseño de plantaciones, adecuación de terrenos, vías, siembra, construcción de plantas de beneficio para la extracción del aceite, obras de infraestructura productiva y administrativa y las relacionadas con la infraestructura social y de servicios para la comunidad vinculada a esta actividad son inversiones considerables que requieren del esfuerzo mancomunado del sector privado y del Estado, no sólo para su financiación sino también para garantizar la seguridad y protección de las mismas.

La difícil situación de mercado que ha enfrentado el sector palmero en los dos últimos años, por la coyuntura de precios estacionales desfavorables, se ha visto agravada por el creciente riesgo que debe asumir el palmicultor colombiano ante las condiciones de inseguridad que vive el país.

Además de la seguridad personal, que ya de por sí representa un enorme riesgo para los productores, debido a la amenaza y el acoso persistente de parte de los distintos actores armados que tienen presencia en todas las zonas donde se desarrolla la actividad productiva, se presenta un nuevo hecho, como es la renuencia de muchas empresas aseguradoras para cubrir los riesgos sobre los diferentes activos del sector, argumentando para ello la situación de desorden y conflicto social que vive el país.

No sobra señalar que las inversiones del sector agropecuario, en general, y del subsector palmicultor, en particular, enfrentan riesgos más altos que las de otros sectores de la economía, debido a que la mayoría de sus activos están en zonas rurales apartadas, no sólo expuestos al sol y al agua, sino también a otros factores del entorno social y ambiental, que en las condiciones actuales del país son particularmente delicadas.

Por ello, es de especial preocupación del sector la desprotección que afrontan muchas empresas ante los actos mal intencionados de terceros, que son riesgos latentes producidos por la subversión, los vándalos y la delincuencia común. Son varias las unidades productivas que ya han visto incrementar, de manera desproporcionada, los costos de sus seguros para cubrir estos riesgos; pero más desafortunado aún es el hecho de que gran parte de ellas ni siquiera puedan acceder a este tipo de seguros, por

cuanto muchas compañías privadas e incluso la propia compañía de seguros del Estado - La Previsora-, se han negado a asumir la cobertura de estos riesgos.

La incertidumbre que conlleva la falta de seguros para amparar los diferentes riesgos de las plantaciones y plantas de beneficio de la agroindustria palmera, dificultan no sólo la vinculación de nuevos inversionistas a esta actividad sino que, además, generan mayores reticencias del sector financiero para el acceso de los palmicultores al crédito institucional. En los últimos años, la banca nacional se viene mostrando renuente a aceptar los activos productivos, como terrenos, cultivos, edificaciones y equipos, entre otros bienes que disponen los palmicultores dentro de sus plantaciones, para la constitución de garantías que respalden sus créditos, con lo cual se hace más onerosa la financiación de su actividad productiva.

La anterior situación demanda con urgencia del Gobierno Nacional mecanismos que permitan cubrir los riesgos que conlleva para el palmicultor la inseguridad que vive el país y rodea su actividad productiva, cuya responsabilidad recae fundamentalmente en el Estado. Fedepalma ha venido insistiendo con el Gobierno en la imperiosa necesidad de establecer un "*seguro de riesgo país*", financiado por el Estado, para amparar aquellos siniestros atribuibles a la falta de garantías para el funcionamiento normal de los negocios. Así mismo, se requiere de su apoyo institucional y presupuesta!, para coadyuvar en la disponibilidad de las pólizas de seguros y la cofinanciación de sus primas, no sólo para la actividad palmera sino para otras actividades agropecuarias del país.

El respaldo del Estado para proteger la agroindustria de la palma de aceite es primordial para restaurar la confianza de los inversionistas y garantizar su vinculación como socios principales en la construcción de un nuevo país, con crecimiento y participación de los ciudadanos en los beneficios del desarrollo.

EDITORIAL

Oil Palm is Forsaken in Colombia

- State support is required to ensure *Country's Risk* -

The Colombian oil palm sector has contributed to the wealth and welfare of large communities throughout the country for over 40 years. Plantation companies and smallholders, professionals and technicians in several areas of expertise, and agricultural workers, among others, have turned the oil palm agribusiness into one of the strongest, most promising and prosperous production sub-sectors of the country.

However, the lack of security and violence prevailing in many areas are significant adverse factors that hinder competitiveness, foreign investment, and exploitation of the physical and human resources required for the development and strengthening of oil palm in Colombia.

Oil palm is a long-term late-yielding crop that demands large investments and strong entrepreneurial management capacity. Plantation design, land preparation, road construction, oil palm planting, palm oil extraction mill construction, production and administrative infrastructure, and social infrastructure and services for the communities involved in this activity are burdensome expenses that require joint efforts from the State and the private sector. However, these efforts should not only focus on financing but on ensuring investment security and protection.

The difficult market situation that the oil palm sector has been faced with in the last two years due to unfavorable seasonal palm oil prices is aggravated by the increasing risks that the oil palm grower must assume due to unsafe social conditions.

In addition to personal safety, which in itself represents an enormous risk to oil palm growers as a result of constant threats and persistent harassment from various armed factions located in most production areas, a new element has appeared. This new ingredient is the reluctance of many insurance companies to provide exposure coverage to the sector's assets, on grounds of the existing social commotion and conflict conditions.

The fact that the agriculture and livestock sector in general and the oil palm sector in particular endures higher risks than other economic activities must not be disregarded. The reason is that the large majority of the industry's assets are located in remote rural areas. Consequently, these assets are not only exposed to weather conditions, but also to other particularly sensitive social and environmental pressures resulting from the present status of the country.

Therefore, the lack of protection from ill-intended third party actions that many companies have to endure is a latent risk resulting from the prevalence of insurgency, vandalism, and common crime. Many production units have suffered an overwhelming insurance cost increase to cover those risks. However, the fact that many companies do not even have access to this kind of insurance is even worse. Many private underwriters, and even the Government insurance company - La Previsora-, have denied insurance coverage to oil palm growers.

The uncertainty created by the lack of coverage for plantation and palm oil mill exposure not only undermines new investments, but also makes the financial sector reluctant to give oil palm growers access to institutional loans. In recent years bankers have hesitated to accept production assets such as land, crops, buildings, equipment, and other estate assets, as collateral to back up loans. Therefore, production financing becomes even more expensive.

The above-mentioned situation requires urgent action from the National Government. Mechanisms to cover oil palm growers exposure to the country's unsafe conditions affecting their economic activity must be adopted as part of the fundamental liabilities of the State. Fedepalma has insisted on the imperative need to create a *"country risk insurance"*, which should be financed by the State to cover damages attributable to the lack of guarantees to normal business operation. In addition, institutional and budget support from the government is required to open insurance policy availability and provide premium co-financing, not only to the oil palm sector but also to all farming-related activities.

State support to protect the Oil Palm Agribusiness is essential to restore investor confidence and ensure investor involvement as primary partners in the construction of a new country, where citizens are entitled to grow and share the benefits of development.